

Editorial

Nuevo gobierno y destiempo mexicano, cuando América Latina retorna

HUMBERTO **MÁRQUEZ COVARRUBIAS**

A la luz del prisma latinoamericano, donde se han incubado procesos de transformación nacional de corte posneoliberal —muchos de los cuales se están desmantelando por una intempestiva ofensiva imperialista y oligárquica, sin mencionar las inconsistencias internas—, el arribo tardío de la oleada democrática en México resulta contrastante. Mientras que en América Latina el debilitamiento de la derecha aconteció más temprano, en el caso mexicano requirió un ciclo más extenuante de seis comicios presidenciales debido a la capacidad de las clases dominantes para aletargar el proceso mediante fraudes electorales y maquinaciones políticas, al influjo del omnipresente poder imperial y al reflujo de los movimientos sociales. El aún incierto giro «posneoliberal» mexicano emana de una coalición de izquierda-centro-derecha, basada en la figura carismática de un líder popular, en un momento crítico para el desarrollo nacional, cuando además se profundizan los lazos de subordinación hacia el hegemon del norte y se posterga una integración plena con los países latinoamericanos.

En el concierto internacional, la región se ha convertido en un gran laboratorio de transformación sociopolítica, donde los gobiernos operan en países con niveles desiguales de desarrollo y refrendan programas de transformación social de alcances diversos. La configuración de una agenda posneoliberal latinoamericana, que mereció distintas denominaciones (desde marea rosa, progresismo y neodesarrollismo, pasando por revolución ciudadana y Buen Vivir, hasta socialismo del siglo XXI), impulsó la emergencia de gobiernos centro-izquierdistas catapultados, a su vez, por movimientos sociales y frentes electorales, los cuales, a la postre, terminaron por delegar el poder popular al gobierno con desenlaces a veces contraproducentes. El ciclo político propició diversas experiencias en formación de gobiernos, gestación de nuevas élites y movilizaciones sociales. El progresismo latinoamericano aflora en un periodo de crisis del neoliberalismo y es insuflado por una coyuntura económica internacional que engendra un periodo de bonanza merced a la exportación de materias primas. El neodesarrollismo y el

modelo extractivista permitieron la retención de una parte de la renta y la formación de fondos estatales que sustentaron políticas públicas y programas sociales que dieron rienda suelta a la fórmula mágica del progresismo: crecimiento más distribución. Ahora el modelo económico está entrampado en una profunda crisis y el derrotero político del progresismo está delimitado por la dinámica económica, donde se establecen los márgenes de maniobra para la política distributiva que condiciona la pervivencia de la hegemonía en ciernes y posterga cualquier proyecto de transformación social sustantiva. Los gobiernos progresistas no trastocaron el patrón de acumulación y prefirieron jugar el papel de gestores nacionales de las redes globales de capital, y en ello cifraron su suerte.

Tomando como referente la experiencia latinoamericana, los términos políticos para la configuración del nuevo gobierno mexicano de corte nacionalista burgués son el progresismo, el neodesarrollismo y el populismo, pero también el neoliberalismo. El progresismo representa una apuesta genérica por el progreso social fundado en el desarrollo de las fuerzas productivas, pero en la versión regional se adhiere al terreno ambiguo de centro-izquierda para impulsar un programa reformista de crecimiento económico y distribución del ingreso. Aunque no cuenta con la potencia de la industrialización sustitutiva de importaciones, el neodesarrollismo articula la intervención estatal, la redistribución de la riqueza, el equilibrio entre clases sociales y la reapropiación de sectores económicos estratégicos para favorecer a una burguesía nacional dependiente de los apoyos estatales y supeditada al capital global. Para consolidar las bases sociales de apoyo, el populismo funge como movimiento sociopolítico que pretende representar al pueblo en general a costa de desmovilizar a las organizaciones sociales y cooptar sus liderazgos. Además, el neoliberalismo persiste como eje de la política orientada por las «señales del mercado», el poder de la oligarquía financiera internacional y la tecnocracia reinante en las dependencias que definen las políticas públicas y el manejo presupuestal. En contraste con el discurso latinoamericanista que revive la

idea de ganar cierta independencia frente al imperialismo, la carta internacional del nuevo gobierno es condescendiente, cuando no sumisa por omisión, con el flamígero gobierno estadounidense, a quien se le sigue considerando un aliado para el desarrollo. La postura conservadora en la materia se sintetiza con el eslogan de que «la mejor política exterior es la política interior».

El presidente triunfante en México, Andrés Manuel López Obrador, carece de una visión latinoamericanista y de un proyecto osadamente antineoliberal, mucho menos anticapitalista: se mueve por las aguas apacibles del pragmatismo político y la construcción de alianzas con diversos y antagónicos sectores económicos y políticos. Su mirada está clavada en el ombligo del ser nacional y tiene como referente el devenir de la historia patria. No deja de llamar la atención que el planteamiento central coincida abiertamente con la proclama reformista de los organismos internacionales orquestadores del neoliberalismo y de la derecha empresarial que plantean que el problema principal y la explicación de todos los males es la corrupción, a diferencia de la perspectiva transformadora de la izquierda que no se queda en los síntomas, sino que se remite al sistema capitalista y sus contradicciones más profundas.

Ajeno al escenario internacional adverso, donde se ha desvanecido el periodo de auge que inflaban los excedentes latinoamericanos con altas cotizaciones del petróleo y otras materias primas, el proyecto denominado la «cuarta transformación» supone que bastará con retener los recursos derrochados por la corrupción y asumir la austeridad «republicana» para cambiar el país entero, sin hacer una reforma fiscal progresiva pero sometiendo al sector público —tachado genéricamente como corrupto— al ajuste mediante el despido de personal, la disminución de salarios, el recorte de presupuestos y programas; en suma, como prescribe el recetario neoliberal, se trata de depurar la maquinaria estatal y ampliar los ámbitos de la inversión privada. En esa lógica, no se postula la necesidad de hacer cambios estructurales en el patrón de acumulación y el sistema de poder, ni de cambiar la constitución política para reconstruir el entramado institucional y la carta de derechos sociales en pauta progresista. El prontuario de proyectos estratégicos incluye una nueva generación de megaproyectos extractivistas, antes criticados por ser depredadores, pero ahora recubiertos bajo el mantra del crecimiento y la generación de empleos (zonas económicas especiales, corredor transísmico, tren maya, reforestación del sureste), el otorgamiento de todo tipo de concesiones al gran capital (subsidio a la nómina, régimen fiscal laxo, garantías

a los planes de negocios, mantenimiento de las contrarreformas) y la negociación preferente con emisarios del viejo régimen («la mafia del poder», que incluiría la amnistía a politicastros y magnates beneficiarios de la corrupción galopante y la apertura de nuevos espacios de valorización de capital).

A semejanza del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que estaba en plena sintonía con el gran capital en Brasil, López Obrador propone un gobierno pragmático de centro-izquierda que respalda a los empresarios y concede la primacía a los grandes negocios, aunque persistan discrepancias ideológicas entre las partes por temas como la redistribución hacia sectores populares mediante programas sociales asistenciales, pero sin una política de revalorización del trabajo, lo cual también favorece a los patrones. Debido a que comparten la misma agenda ideológica y política, el acuerdo total entre gobierno y capital sólo se verifica con los gobiernos de las derechas, como ocurre ahora con Jair Bolsonaro, en Brasil; Mauricio Macri, en Argentina, entre otros. Sea como fuere, el lopezobradorismo busca un acuerdo pleno con el gran capital, aunque en el discurso postula el principio ambiguo de «gobernar para todos, pobres y ricos» (antes era «por el bien de todos, primero los pobres»), en apelo a un irreal equilibrio social que ilusoriamente derivará en un bienestar para «todos». No obstante la inviabilidad del precepto interclasista, mientras se aposenta el nuevo gobierno, funciona eficazmente como arma propagandística.

Para los sectores de izquierda (indigenista, autonomista, comunista, anarquista, socialista y comunista) el lopezobradorismo no marca una ruptura con el patrón de acumulación y el régimen político sino que apuntala el reformismo, la socialdemocracia e imprime una continuidad neoliberal inercial, cuando mucho un «capitalismo con rostro humano», muy lejos de una agenda de transformación social de corte poscapitalista o anticapitalista. Para los sectores de la derecha (neoliberal, neoconservadora, religiosa, neofascista e imperialista) representa una especie de regresión a los años del populismo setentero y el estatalismo, pero no dejan de presionar y chantajear para obtener acceso preferencial a las concesiones, exenciones y recursos que les promete el gobierno. Más allá de las posiciones ideológicas y posicionamientos partidarios, los sectores populares tienen eventualmente el potencial de constituirse en el fiel de la balanza, para obligar al nuevo gobierno a adoptar una política progresista, antineoliberal y popular, con miras a una espiral ascendente de transformación social sustantiva, que no se contiene dentro los linderos del capitalismo. 🐦